

FRANCIA

SITUACIÓN DEL EMPLEO PARA JÓVENES PROFESIONALES

En Francia, como en los demás países de la OCDE, el paro aumentó con la crisis afectando a la población joven, principalmente de 15 a 24 años, cuya tasa de paro pasó de 19% en el cuarto trimestre de 2007 a 21,2% en el cuarto trimestre de 2008. El aumento fue más importante para los hombres (+3,2 puntos) que para las mujeres (+0,6 puntos) y por primera vez la tasa de paro masculina sobrepasó a la femenina. Esta situación puede explicarse porque los hombres ocupaban muchas veces empleos de menor cualificación en sectores muy sensibles a la crisis como la construcción.

Las previsiones de la OCDE para los próximos años no son optimistas ya que se prevé una tendencia al aumento del paro juvenil en la zona OCDE y particularmente en Francia.

La crisis llegó a Francia cuando la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo no era muy favorable. Se encontraban con una tasa de paro en 2007 superior en 7 puntos a la media de la OCDE y, en el mismo año, el paro de larga duración afectaba a un joven sobre cuatro mientras que la media de la OCDE era de 1 sobre 5. Manifiestan un gran pesimismo sobre su futuro profesional.

Más allá de la crisis, es necesario ayudar a los jóvenes con medidas específicas, que contribuyan a integrarles en el mercado de trabajo. Habrá que elaborar nuevas reformas para facilitar la transición de los jóvenes hacia el empleo en Francia.

El modelo francés de inserción profesional

La inserción profesional depende esencialmente, en Francia, de la obtención de un diploma, muy valorizado por los empleadores. Cuando el recorrido escolar no desemboca en un diploma se dificulta la entrada en el mercado de trabajo, con la posible exclusión y situación de pobreza.

Existen 3 grupos de jóvenes, los “eficientes”, “los que quedan atrás” y los de “difícil inserción” (marginados).

Los jóvenes que “quedan atrás” y no tienen ni empleo, ni escuela, ni formación (los NINI) representan 11% de los 15-24 años en Francia, muy cerca de la media OCDE (12%).

En Francia, en ese grupo, se encuentran principalmente los que no tienen diploma, son de origen inmigrante o viven en barrios desfavorecidos.

El otro grupo con “dificultad de inserción” suele tener diploma pero tarda en estabilizarse en el mercado del empleo navegando entre empleos temporales y periodos de paro.

La existencia en Francia de un salario mínimo elevado y de una protección del empleo importante ha conducido a una segmentación que penalizó el acceso al del mercado de trabajo a un número importante de jóvenes. Medidas de adaptación de las modalidades de funcionamiento del mercado de trabajo contribuirían a facilitar la inserción profesional de este tercer grupo.

Mejorar la transición escuela/empleo

Para ayudar a los jóvenes “dejados atrás” y “con dificultad de inserción” a salir de la precariedad o de la pobreza, el Gobierno francés tendrá que adoptar una serie de medidas que respondan a los objetivos siguientes:

- que al término de la escolaridad cada individuo haya adquirido las competencias requeridas por el mercado de trabajo;
- que la transición de la escuela al empleo se efectúe de forma “menos brusca”;
- Luchar contra los “frenos” al empleo relacionados con la demanda;
- conferir mayor eficacia a las medidas activas destinadas a los jóvenes alejados del empleo y reforzar la protección social de los jóvenes en situación de precariedad.

[Garantizar una salida de la escuela con las capacidades requeridas por el mercado de trabajo.](#)

A pesar de los esfuerzos realizados por Francia, en 2008, 18% de jóvenes salen de la escuela sin el bachiller, considerado como el diploma mínimo para integrar el mercado de trabajo.

A los 16 años, 3% de los jóvenes ya no están escolarizados y 9% a la edad de 17 años.

Habría que aplicar de forma diferente la obligación de escolaridad hasta los 16 años, estableciendo el fin de la obligación al término del año escolar y no a la fecha de cumplimiento de la edad (que permite salir de la escuela sin terminar el año escolar). Se podría llevar la obligación a la adquisición de una base escolar mínima a los 18 años, como ocurre en los Países Bajos donde una ley obliga a los jóvenes de 18 años que no han obtenido un diploma de dos años de segundo ciclo de enseñanza secundaria profesional, a cursar una formación profesional en alternancia.

La orientación de los alumnos tiene mala prensa en Francia y la vía profesional, frente a las vías generales o tecnológicas, se considera como una vía sin prestigio. Se orientan a los alumnos con menos capacidades hacia sectores profesionales de poca demanda porque hay plazas disponibles sin tener en cuenta los deseos de los alumnos. Estos deberían ser mejor informados sobre las posibilidades profesionales del mercado.

Existe un dispositivo de “escuela de segunda oportunidad” a partir de los 18 años. Sería conveniente, según la OCDE, rebajar la edad de acceso a 16 años y extender su aplicación a todos los jóvenes en situación de fracaso escolar en Francia.

Durante la jornadas de “preparación a la defensa” se detectaron dificultades de lectura en 15% de hombres y 8% de mujeres. Siendo estos conocimientos indispensables para el acceso a un empleo, podrían aprovecharse estas jornadas para censar a los jóvenes sin empleo, escuela ni formación y orientarles hacia estructuras de formación profesional o educativa adecuadas.

Uno de los objetivos de la formación profesional es intentar corregir las desigualdades al término de la escolaridad pero en la realidad la práctica consolida o aumenta esta diferencia de formación: la tasa de acceso a la formación profesional continua de las personas de 20 a 29 años es 3 veces más elevada en Francia para las personas con diploma de enseñanza superior que para las personas sin diploma.

Habría que reforzar la validación de conocimientos adquiridos por la experiencia (VAE) y el contrato de profesionalización creado en 2005 tendría que orientarse hacia los jóvenes menos cualificados. (Sólo un 9% de los jóvenes sin cualificación accede a este contrato).

Para que los jóvenes puedan adquirir las competencias necesarias que exige el mercado de trabajo, podrían aprobarse las medidas siguientes:

- movilizar todos los medios necesarios y los agentes implicados para evitar la ruptura y abandono escolar;
- reformar el funcionamiento de la orientación en la enseñanza secundaria y mejorar la articulación entre orientación escolar y orientación profesional
- instaurar un “derecho diferido” a la formación para los jóvenes que terminan su escolaridad sin haber adquirido los conocimientos básicos, sin cualificación y/o sin diploma;
- ayudar más con los fondos para la formación profesional a las pequeñas empresas para hacer frente a sus gastos de formación de jóvenes poco cualificados.

Transición menos brusca de la escuela al empleo

Si comparamos con países nórdicos donde los jóvenes van y vienen de la escuela al empleo antes de estabilizarse definitivamente, en Francia los jóvenes tienen pocas posibilidades de equivocarse, sondear, tantear, antes de entrar en el mercado de trabajo.

La proporción de jóvenes que simultanea empleo/estudios está en aumento desde los años 90 pero sigue siendo escasa comparada a la de otros países (25% de los 20-24 años, inferior en 9 puntos a la media de la OCDE).

Para incentivar esta actividad empleo/escuela se podría conceder una subvención o complemento de salario para los que trabajan y estudian, con un máximo de 15 h de trabajo por semana. Este dispositivo podría ser evaluado rápidamente para asegurarse que los beneficios esperados en materia de inserción profesional son más importantes que los efectos no previstos ni deseados.

La profesionalización de las formaciones de los estudiantes se ha desarrollado en Francia con los cursillos obligatorios en empresa pero encontrar una empresa es bastante complicado sobre todo para los jóvenes hijos de inmigrantes o de barrios desfavorecidos.

El Ministerio de Educación elaboró un programa “Objetivo Cursillo” para garantizar el acceso de los alumnos de manera equitativa.

Sin embargo habrá que garantizar que los cursillos de prácticas tengan valor pedagógico verdadero y se relacionen con los programas de estudio o de formación y también evitar que las empresas utilicen esta vía para obtener mano de obra de poco coste ya que sólo es obligatoria una remuneración de un tercio del SMIC al cabo de 3 meses de prácticas consecutivos y únicamente en el sector privado. Ninguna gratificación está prevista en el sector público.

Se recomienda pues la adopción de las siguientes medidas:

- que se subvencione moderadamente el trabajo de los estudiantes para que pueda desarrollarse la compatibilidad trabajo/estudios;
- que se efectúen prácticas obligatorias a partir del tercer año de estudios universitarios;
- que se sancione a las empresas que abusan de las “prácticas falsas” (solicitudes de las empresas a los centros de enseñanza de convenios de prácticas para jóvenes que ya tienen sus diplomas)

- aplicar en las administraciones públicas el decreto que establece la remuneración obligatoria de las prácticas.

Luchar contra los obstáculos al empleo de los jóvenes relacionados con la demanda

En Francia, es bastante corriente la discriminación en la contratación de los jóvenes de minorías visibles. El sistema de “tutoría” con la intervención de voluntariado para ayudar al joven a acceder a la empresa, junto con la lucha contra las discriminaciones, puede ser una de las soluciones.

Los estudios de la OCDE y de otros organismos han mostrado que tener un salario mínimo moderado no tiene un impacto negativo sobre el empleo de los jóvenes. Sin embargo, cuando es alto, puede penalizarlos. En Francia, el SMI es muy superior (19 puntos) a la media de la OCDE.

Francia ha optado por el mantenimiento del SMI y por reducir costes del trabajo disminuyendo las cotizaciones patronales de los salarios bajos o introduciendo algún régimen derogatorio al SMIC para los menores de 18 años con menos de 6 meses de antigüedad o para contratos subvencionados o de alternancia.

Estas políticas no dieron mucho resultado para favorecer el empleo de los jóvenes de poca cualificación ya que en el momento de la contratación se encontraban frente a trabajadores adultos de mayor experiencia con mismo nivel de salario mínimo.

El aprendizaje también tendría que desarrollarse. Dentro del Plan Plurianual de cohesión social, el gobierno francés tiene como objetivo conseguir un efectivo de 500.000 jóvenes en aprendizaje y duplicar el número de aprendices en los establecimientos de enseñanza superior. Es necesario que esta vía de formación acoja de manera prioritaria a los alumnos entre 15 y 16 años sin cualificación para ayudarles a conseguir una cualificación y un diploma durante su experiencia laboral. Se podrían beneficiar únicamente de las exoneraciones de cotizaciones sociales y otras ayudas públicas, las empresas que acojan a aprendices sin cualificación y subvencionar los empleadores que contraten al aprendiz que han formado.

Al parecer, la mayor protección de los contratos de duración indefinida (CDI) frente a los contratos de duración determinada (CDD) es otra dificultad para el trabajo continuado. La transformación del CDD en CDI al cabo de un año para los jóvenes de 15-24 años es de 16% en Francia frente a un 70% en Reino Unido.

Se podría examinar la posibilidad de convertir automáticamente los CDD en CDI al cabo de un periodo determinado para todos los trabajadores sin criterio de edad.

Para cumplir este objetivo podrían efectuarse las siguientes reformas:

- incitar activamente la tutoría de los jóvenes inmigrantes por cuadros del sector privado;
- limitar las ayudas públicas por aprendizaje a jóvenes no cualificados;
- aumentar de manera significativa las plazas de aprendizaje en el sector público para los jóvenes menos cualificados;
- continuar los esfuerzos para reducir la segmentación del mercado de trabajo. Los CDD no son realmente un camino rápido hacia el empleo estable. Habría que prever,

como en los Países Bajos, la conversión del CDD en CDI al cabo de un cierto tiempo.

[Conferir mayor eficacia a las medidas activas para los jóvenes con dificultades de empleo y reforzar la protección social de los jóvenes los más desfavorecidos.](#)

Después de haber acumulado más de 80 medidas de política de empleo distintas a favor de los jóvenes, en los últimos 30 años, el Gobierno nombró en enero de 2009 un alto comisionado para los Jóvenes encargado de incentivar una política de autonomía par este colectivo.

Dentro del Plan “Espoir banlieue”, se introdujo el contrato de autonomía para la inserción profesional de 200.000 jóvenes de menos de 26 años sin empleo y residiendo en la periferia.

Por otra parte, se elaboró un dispositivo de internado en 2005 para paliar las necesidades de formación sobre el comportamiento destinada a jóvenes de 18 a 22 años en vía de marginalización y con dificultades de acceso al empleo. El coste inmobiliario de este sistema parece desproporcionado frente al número de personas acompañadas.

A pesar de toda esta serie de dispositivos, se constató que los jóvenes franceses menores de 25 años tienen poco acceso a prestaciones financieras. Sólo tienen mayores prestaciones de paro (70% del salario de referencia frente a 62% de media para los países de la OCDE).

El acceso a la ayuda social y más especialmente a las rentas sociales mínimas (Renta de Solidaridad activa) sólo es posible en Francia, como en Luxemburgo o en España, a partir de los 25 años.

Posiblemente habría que extender el beneficio del RSA a los menores de 25 años y ofrecerles mayor protección.

Se recomienda:

- aportar mayores medios de acompañamiento personalizado hacia el empleo para los jóvenes sin cualificación y mejorar la gestión para lograr una mejor coordinación de la acción a nivel nacional y territorial;
- evaluar los dispositivos de inserción para los jóvenes en situación de gran dificultad;
- Ampliar el derecho al seguro de paro a los jóvenes teniendo en cuenta cualquier periodo de empleo o cursillos.

Garantizar una seguridad económica para los menores de 25 años con mayores dificultades e integrarla dentro de las medidas de activación.